

H529

8

1997



**Ministerio
de Cultura
y Educación**

**Secretaría de
Políticas
Universitarias**

Informe de Gestión: Becas-CONEAU- Publicaciones

La Universidad

Informe Especial
Las Universidades
ante la nueva ley
de presupuesto

ARTICULOS

actualización académica de
de profesores de profesorado

evaluación institucional

**Boletín
informativo**

Año IV - Nº 8

Noticias - Libros - Publicaciones Recibidas - Agenda

Ministerio de Cultura y
Educación de la Nación

Secretaría de Programación y Evaluación Educativa

**LLAMADO A CONCURSO
NACIONAL**

En el marco del Programa de Actualización Académica para Profesores de Profesorados se llama a concurso nacional para el dictado de doscientos (200) cursos destinados a Profesores de las jurisdicciones que se detallan (ver también el retiro de contratapa para la continuación de los cursos y más información).

Provincia	Disciplina
Buenos Aires	Biología (8), Física (2), Matemática (7) Química (1) Pedagogía (15) Psicología (6) Soc. Sist. De e Inst. Esc. (5) Lengua extranjera(inglés)(3) Lengua (6) Literatura (2) Filosofía (4) Geografía (4) Historia (6)
Catamarca	Pedagogía (1) Psicología (1) Soc. Sist. De e Inst. Esc. (1) Lengua (1) Geografía (1) Historia (1)
Chaco	Biología (1) Matemática (1) Lengua (1) Filosofía (1) Historia (1)
Corrientes	Biología (1) Matemática (2) Pedagogía (2) Psicología (2) Soc. Sist. De e Inst. Esc. (1) Lengua (2) Historia (2)
Entre Ríos	Matemática (1) Pedagogía (2) Psicología (2) Lengua (1) Filosofía (1) Geografía (1)
Jujuy	Biología (1) Matemática (1) Química (1) Pedagogía (2) Psicología (1) Soc. Sist. De e Inst. Esc. (1) Lengua (1) Filosofía (1) Historia (1).
La Rioja	Pedagogía (1) Soc. Sist. De e Inst. Esc. (1) Lengua (1) Historia (1).
Misiones	Biología (1) Matemática (1) Pedagogía (2) Soc. Sist. De e Inst. Esc. (1) Lengua (1) Filosofía (1) Historia (1).

Ministerio de Cultura
y Educación

Secretaría de Políticas
Universitarias

*Ministra de Cultura y
Educación de la Nación*
Lic. Susana B. Decibe

*Secretario de Políticas
Universitarias*
Lic. Eduardo Sánchez Martínez

*Subsecretario de Desarrollo
de la Educación Superior*
Dr. Eduardo Roque Mundet

La **U** *universidad*

Boletín Informativo de la SPU
Año IV- N° 8 - Abril 1997

*Composición, Diseño,
Coordinación y
Producción*



Los artículos firmados de esta
publicación son exclusiva
responsabilidad de sus autores y
no necesariamente reflejan la
opinión de la SPU.



SUMARIO

Editorial 2
Construir un Sistema Universitario

Informe Especial 4
Nuevas tendencias en el financiamiento de
la educación superior

Artículos 10

- ♦ Programa de actualización académica de
profesores de profesorados
- ♦ El lugar de la evaluación institucional en la
política universitaria de los '90

Informe de Gestión 21

- ♦ Programa Nacional de Becas Universitarias
- ♦ Autoevaluación Universitaria: asistencia
técnica e intercambio de experiencias
- ♦ Programa de Publicaciones

Libros 25

Publicaciones Recibidas 26

Noticias 27

- ♦ Autonomía Universitaria y Gratuidad
- ♦ Evaluación en la Universidad Nacional de
Cuyo
- ♦ Mercosur Educativo
- ♦ Departamento de Idiomas en la UBA
- ♦ Unificación curricular de la enseñanza de
las ingenierías en la Argentina

Agenda 31

CONSTRUIR UN SISTEMA UNIVERSITARIO

CONSTRUIR un sistema universitario articulado y sólido, a la altura de los tiempos que nos toca vivir, es uno de los desafíos más importantes que hoy tenemos las universidades y el área del Estado que se ocupa de la cuestión universitaria.

Si no somos capaces de generar los conocimientos que la sociedad demanda, de formar los recursos humanos que el desarrollo y la transformación del país exigen y los docentes e investigadores que las propias casas de estudio necesitan para su crecimiento y renovación, como universidades no tendremos derecho a que la sociedad atienda nuestros requerimientos, y como país no tendremos posibilidad de insertarnos en el mundo en el lugar que sería deseable para el próximo milenio.

La realidad actual nos presenta un escenario de crecientes exigencias en materia de calidad -donde sólo subsistirán los que sean capaces de lograrla- de creciente competitividad y de escasez relativa de recursos, y en consecuencia, de creciente necesidad de cooperación, de complementación y de emprendimientos comunes, que eviten tanto la dispersión como la superposición de esfuerzos.

A ese mundo difícil nos estamos asomando desde una posición débil como sistema universitario: porque faltan articulación y coordinación; porque falta fortalecer el espacio interinstitucional; porque faltan aún reglas de juego para el conjunto del sistema; porque todavía no logramos la necesaria complementariedad en los esfuerzos; porque el conjunto presenta preocupantes ineficiencias, que en un contexto de escasez relativa de recursos terminan por condicionar de modo creciente las posibilidades de mejorar la calidad, que es por supuesto el objetivo mayor.

EN esa tarea de construir un sistema universitario, no estamos sin embargo en el punto cero. Además del trabajo de años de las propias universidades, que es necesario recordar y rescatar, en los últimos tiempos se han hecho cosas importantes:

- ♦ contamos con un marco regulatorio común, no sólo para el conjunto de universidades sino para el conjunto de la educación superior;
- ♦ contamos con un sistema de evaluación institucional, que tiene como propósito principal ayudar a mejorar la calidad de lo que se hace en las universidades y garantizar la fe pública en esas instituciones;
- ♦ contamos, además, con un sistema de apoyo a los procesos de reforma y al mejoramiento de la calidad de las instituciones del sistema, a través de un importante fondo constituido para ello (FOMECE);
- ♦ contamos también con un mecanismo destinado a incentivar la actividad de investigación de los docentes, cuyo verdadero impacto en la vida universitaria conviene observar y valorar con cuidado;
- ♦ contamos con un instrumento -incipiente, es verdad, pero pensamos que promisorio- para promover la equidad en el acceso y avance de los estudiantes en el sistema;
- ♦ contamos, en fin, con un marco institucional para facilitar la articulación del sistema a nivel regional, para promover acciones de cooperación internacional y para vincular más estrechamente la generación de conocimientos y tecnologías con su aplicación y desarrollo en la producción y los servicios.



ESTAS y otras acciones que el sistema está llevando adelante son sin duda importantes para su consolidación.

Pero quedan aún muchas cosas por hacer. Entre ellas:

- ♦ *mejorar sustancialmente los flujos de información -en términos de calidad, de oportunidad, de confiabilidad- sin lo cual es imposible constituir un verdadero sistema;*
- ♦ *fortalecer el espacio interuniversitario, porque hay una cantidad de cuestiones y problemas que se debieran abordar en ese ámbito: coordinar y planificar mínimamente la creación de carreras, establecer mecanismos de autorregulación, encontrar formas de complementarse, de desarrollar proyectos cooperativos, de compartir esfuerzos para que no todos se vean obligados a hacer todo;*
- ♦ *mejorar la articulación entre las partes del sistema -¡hay aquí un formidable trabajo por realizar!-, encontrando formas novedosas de responder a los muchos desafíos, de tender puentes para una mejor comunicación y relación;*
- ♦ *establecer, en fin, reglas de juego claras y objetivas para el funcionamiento del sistema, porque las relaciones entre las universidades y entre éstas y el Estado deben estar sometidas a pautas previsibles y alejadas tanto como sea posible de la presión corporativa o sectorial y de la discrecionalidad de los actores involucrados.*

ES en la perspectiva de instalar reglas de juego claras, conocidas, previsibles que resulta importante el paso dado por el H. Congreso de la Nación al establecer *criterios y pautas para distribuir entre las universidades nacionales el incremento presupuestario* logrado para el presente ejercicio fiscal, tema del que se ocupa el informe central de este número.

Ello importa un claro punto de inflexión en la conocida tendencia a asignar los recursos públicos siguiendo un esquema de base histórica, en el que tiene una ponderable incidencia la capacidad de influencia de las instituciones universitarias. Conforme a la nueva modalidad, en cambio, lo que se tiene en cuenta, es el desempeño de las instituciones frente a relaciones explícitas de eficiencia y equidad (egresados/ingresantes, materias aprobadas/alumno, auxiliares/profesores, etc.), cuya continuidad en el tiempo debe llevar a un sistema de distribución que impulse una asignación más racional y que conduzca, en definitiva, a un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.

Los modelos utilizados para hacer operativa la distribución no son, por supuesto, perfectos, como no lo son en ningún lugar del mundo. Su perfeccionamiento exige, por un lado, contar con más y mejor información (¡un verdadero desafío para cada una de las universidades y para el sistema como conjunto!), y por otro, llevar a cabo un trabajo común con las instituciones, que permita afinar los modelos y mejorarlos, introduciendo los matices y ponderaciones que sean necesarios.

El resultado objetivo de esta primera experiencia muestra, no obstante, un dato para nada desdeñable: que no ha habido un direccionamiento de los recursos en función de afinidades políticas.

Nos parece por ello que más allá de críticas puntuales (que son bienvenidas porque ayudan a mejorar) empezar a distribuir recursos de modo más objetivo y transparente, implica un gran paso adelante en el intento de formular y aplicar políticas públicas alejadas tanto como sea posible de la discrecionalidad. Y significa un paso importante frente al desafío de construir un sistema universitario a la altura de estos tiempos ♦

Eduardo Sánchez Martínez

*nuevas tendencias
en el financiamiento de la
educación superior*

las universidades nacionales

en la ley de presupuesto 1997

Criterios para la distribución

El artículo 30 de la Ley de Presupuesto para 1997, establece que una parte de los fondos correspondientes a las Universidades Nacionales provenientes del Tesoro Nacional -por valor de \$ 111.800.000- será distribuida por el Ministerio de Cultura y Educación y éste procederá de acuerdo a los siguientes criterios:

1- Ninguna Universidad tendrá en el ejercicio 1997 un nivel de crédito inferior al fijado por la ley 24.624 para 1996.

2- Se atenderán las particulares necesidades de las universidades de reciente creación o con dificultades especiales.

3- Se proveerá al financiamiento de mejoras en la infraestructura física y en el equipamiento. Las prioridades que se establezcan deberán

considerar -entre otros aspectos- el desempeño de las universidades en los procesos de evaluación externa, en los proyectos del Fondo para el Mejoramiento de la Calidad y en el Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores, así como también contemplarán y premiarán el mejoramiento de la gestión administrativa, el establecimiento de adecuados mecanismos de control interno y una eficiente y razonable relación egresados/ingresantes y alumnos/docentes.

4- Se distribuirán los fondos destinados a la enseñanza según modelos y fórmulas objetivas que aseguren mayor calidad, equidad y eficiencia en el sistema universitario.

Estos modelos y fórmulas premiarán la mayor eficiencia, medida principalmente por las relaciones egresados/ingresantes, alumnos/

docentes, auxiliares/ profesores y cantidad de materias aprobadas por alumno. Por otra parte, las fórmulas y modelos objetivos a emplearse a los efectos de la distribución de los créditos, deberán desalentar aquellas carreras con oferta excedentaria.

La efectivización de las transferencias en favor de las Universidades Nacionales establecidas en el artículo 30 -con la sola excepción de los créditos previstos para el pago de incentivos a los docentes investigadores (en concordancia con las disposiciones del Decreto N° 2.427/93 y su reglamentación) quedará sujeta a acuerdos a firmarse entre las respectivas Universidades Nacionales y el Ministerio de Cultura y Educación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, que garanticen una correcta y eficiente aplicación de estos recursos y una mejora en la prestación del servicio educativo, atendiendo a las prioridades fijadas por cada universidad sobre la base de programas con metas

**Ninguna
Universidad
tendrá en el
ejercicio 1997
un nivel de
crédito inferior
al fijado
para 1996.**

explícitas y auditables.

Esta iniciativa legislativa marca un punto de inflexión para nuestro sistema universitario, ya que el Congreso ha establecido un esquema sustancialmente distinto del que se venía siguiendo hasta el presente, que permite comenzar a revertir inequidades que derivan del sistema de distribución de base histórica.

No es ya el Congreso el responsable directo de la distribución del incremento. Esta tarea le es ahora encomendada al Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, que deberá hacerlo según pautas precisas que el propio legislador ha establecido con claridad.

De este modo, la distribución resultante no es expresión de la voluntad discrecional del Ministerio sino resultado de la aplicación de fórmulas de asignación en las que se venía trabajando técnicamente desde hace tiempo y que básicamente tienen en cuenta las pautas definidas por la Ley de Educación Superior, que dispone que el aporte público deberá considerar indicadores de eficiencia y equidad.

asignación presupuestaria entre universidades nacionales

**Distribución de los
recursos adicionales
asignados a las
Universidades Nacionales**

Objetivos y antecedentes

En sus tres primeros años de existencia, la SPU ha trabajado para la transformación del sistema de educación superior. El primer gran paso se logró con la propuesta y posterior aprobación de la normativa básica para el desarrollo y la regulación del sistema.

Paralelamente, se fueron diseñando e implementando diversos programas estratégicos de reforma, como el Programa de Incentivos, el FOMECE y el Programa de Mejoramiento del Sistema de Información Universitaria, entre otros que ya se encuentran en pleno funcionamiento. En el marco de esta reforma, se hacía necesaria una revisión de la modalidad histórica de distribución presupuestaria.

En gran parte del mundo, los cambios en los sistemas de educación superior ocurridos

durante las dos últimas décadas, condujeron a la reformulación de los mecanismos de financiamiento de la educación superior, cuyas características previas se volvieron ineficientes ante las nuevas necesidades surgidas de la masificación de la educación superior, los cambiantes requerimientos del mercado laboral y otros factores conocidos. En la Argentina, a todo esto se sumó una modalidad de distribución de recursos de base histórica, altamente discrecional.

Las asignaciones para el ejercicio 1997

Lo establecido por la Ley de Presupuesto de este año para la distribución de fondos entre las Universidades Nacionales, implica -entre otras cosas- que todas las transferencias adicionales sean efectuadas a través de nuevos modos objetivos y transparentes de asignación.

La actual asignación presupuestaria otorga a las universidades Nacionales 40 millones de pesos adicionales, con tres objetivos principales: uno, el desarrollo de

la enseñanza universitaria estatal; dos, la concreción de inversiones adicionales en infraestructura física y equipamiento; y tres, el apoyo a las instituciones nuevas y con problemas especiales.

Nuevas modalidades

Las tres nuevas modalidades de asignación se concretarán a través del *Programa de Financiamiento para el Desarrollo de la Enseñanza Universitaria (PROFIDE)*, que distribuirá fondos adicionales disponibles para gastos de enseñanza; del *Programa de Financiamiento de Inversiones (PROIN)*, que asignará fondos para proyectos de obras de infraestructura y equipamiento, de acuerdo a un orden de prelación que resulta, dada la restricción presupuestaria del ejercicio: (i) de las prioridades fijadas para los proyectos formulados por las propias universidades, (ii) de pautas objetivas de evaluación -en términos de calidad, eficiencia y equidad- elaboradas por la SPU, para definir el ordenamiento de las instituciones peticionantes; y finalmente, del *Programa de Apoyo al desarrollo de Universidades Nuevas o con Problemas especiales (PRO-UN)*, que aportará recursos adicionales para funcionamiento e inversión a las universidades nuevas o con problemas especiales, sobre bases racionales que contemplen sus necesidades particulares.

El modelo de asignación de recursos adicionales para la enseñanza

Para el diseño de este modelo se utilizaron exploraciones propias de la SPU y un trabajo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Ambas propuestas preliminares se presentaron en el Seminario Internacional sobre asignación de recursos a las universidades nacionales que organizó la SPU en 1996 y del que *La Universidad* informó oportunamente.

En los meses posteriores al Seminario, se encaró el análisis y desarrollo de esos modelos con el objetivo de elaborar propuestas operativas de asignación, aptas para distribuir recursos adicionales en 1997. En noviembre pasado el trabajo fue terminado con el título de "*Propuestas alternativas de asignación de los recursos públicos entre las universidades nacionales*" (SPU, MCyE, 1996).

A partir del análisis de dicho trabajo, la SPU estimó posible adoptar una de las alternativas de distribución de recursos denominada "Modelo de costos estándar". Este modelo incorpora relaciones normativas que implican exigencias de mayor eficiencia a las universidades en varios campos. Algunas de las variables consideradas han sido: materias aprobadas por alumno, re-

lación alumnos/docente, relación graduados/ingresantes, y estructura de la matrícula de alumnos.

Estas mayores exigencias toman en consideración las relaciones promedio del sistema y resultan en redistribuciones presupuestarias que supondrían -de aplicarse el modelo sin restricciones- aumentos y disminuciones en los fondos asignados a cada universidad según sea la diferencia entre la situación presente y el presupuesto «objetivo» o «normativo». Sin embargo, se ha decidido aplicar el modelo con la restricción de no exigir reducciones presupuestarias a ninguna universidad. En consecuencia, sólo se producen ajustes positivos (aumentos presupuestarios) a favor de las universidades «subfinanciadas»; vale decir aquellas que, de acuerdo al modelo, deben recibir más recursos para enseñanza.

Aplicada de este modo, la alternativa elegida demanda más fondos presupuestarios para concretar las redistribuciones necesarias en el sistema e implica menores exigencias a las universidades. Es por esto que la redistribución de recursos deberá complementarse en varios ejercicios, sobre la base del perfeccionamiento del modelo empleado. A su vez, el modelo no comprende a las universidades de reciente creación, cuyas necesidades serán atendidas mediante otro sistema de asignación.

Se propone como resultado deseado un incremento en la relación materias/alumno de hasta un nivel 10% superior a la media del sistema (o sea hasta 2,62) y una relación egresados/ingresantes igual al promedio del sistema para todas las universidades (vale decir de 0,24).

Por otra parte, se suma una variable adicional: propone ciertos límites al financiamiento de los nuevos ingresantes en las tres carreras que muestran mayor exceso de matrícula (contador público, abogacía y medicina). El ajuste que se incorpora implica que sólo se financia el total de los nuevos matriculados en estas tres carreras hasta el límite del 30% de los ingresantes totales de cada universidad cuando existan las tres carreras, hasta el 25% cuando la universidad sólo tenga dos, y hasta un 15% cuando sólo tenga una de ellas.

Debe señalarse por último que el trabajo técnico mancomunado de la SPU, el CIN y las universidades contribuirá al perfeccionamiento -año a año- de estos modelos, en el marco de la necesaria definición de orientaciones estratégicas para el sistema.

El modelo de asignación de recursos de inversión

A pesar de haber aumentado significativamente res-

pecto de años precedentes, las inversiones en infraestructura y equipamiento por parte de las universidades nacionales sólo representan, en el período 1993/95, alrededor del 5% de las erogaciones anuales totales.

Este nivel es muy bajo comparado con los estándares internacionales¹, y ni siquiera asegura la reposición del activo existente. Por esta razón se están realizando especiales esfuerzos para inducir un mayor y más racional nivel de este tipo de inversiones en el sistema. En 1996 se solicitó a las universidades información acerca de sus prioridades de inversión y dado que respondieron con destacable eficacia y compromiso a esta convocatoria, hoy se dispone de un completo panorama de la situación. Asimismo, se impulsó la incorporación del Sistema Universitario al Sistema Nacional de Inversión Pública, con lo que se espera, por un lado, obtener mayores recursos para inversión, y por el otro mejorar el proceso de formulación y ejecución de proyectos por parte de las universidades y en consecuencia de los modos de asignación, tanto por parte de las universidades como de la SPU. También se asegura -en el contexto del Sistema Nacional de Inversión Pública- cierta prioridad en la disponibilidad de recursos para los proyectos elegidos en los sucesivos presupuestos hasta la termi-

nación de las obras. Por último, la incorporación de proyectos de inversión universitaria al Banco de Proyectos de Inversión nacional prepara al sistema para la eventual gestión futura de cofinanciamiento internacional de largo plazo.

Para efectuar la selección de proyectos financiables con recursos adicionales, se diseñó un modelo que combina dos fórmulas para definir un "orden de prelación" de las universidades nacionales, tratándose por separado a las de reciente creación o con problemas especiales. Este orden respeta la priorización de los proyectos de inversión definida por cada universidad y permite elegir de modo objetivo el conjunto de proyectos que podrá ser financiado en 1997 dada la restricción presupuestaria.

Una de las fórmulas combina seis variables históricas y estructurales para otorgar puntaje a cada universidad de acuerdo a criterios normativos y, principalmente, de equidad. Dichas variables son, entre otras, el presupuesto promedio por alumno y la inversión por alumno durante el período 1993/95 así como el cumplimiento del límite del 85% de las erogaciones totales en gastos de personal.

La otra fórmula reúne variables de evaluación que permiten ordenar a las universidades según niveles relati-

vos de calidad y eficiencia (tanto académica como administrativa) tales como concreción de evaluaciones, performance del Programa de Incentivos, indicadores de gestión administrativa, y otras. Ambas fórmulas se combinan según una ponderación que da peso mayor a las variables de evaluación para obtener el orden de prelación institucional buscado, de modo congruente con las políticas de transformación fijadas para el sistema. De este modo se asignarán más de \$9,7 millones adicionales para financiar proyectos, por un total de casi \$20 millones durante 1997.

El modelo opera considerando los primeros proyectos presentados por universidad: para las cinco primeras universidades elegibles de acuerdo al modelo y según la restricción presupuestaria del ejercicio, se fijó un tope por universidad de 1 millón de pesos. En los casos en los que los montos de los proyectos elegibles superen estos topes es necesario definir las etapas de ejecución teniendo en cuenta la posibilidad de completar y habilitar instalaciones parcialmente, evitando comenzar obras que por motivos presupuestarios o financieros queden luego paralizadas.

La necesidad de fijar topes resulta de la decisión de las autoridades de favorecer la distribución de fondos a la

mayor cantidad posible de universidades dentro de la restricción presupuestaria global y respetando el orden de prelación definido.

Cabe mencionar que en todos los casos fueron en principio considerados no elegibles aquellos proyectos no considerados prioritarios por la política sectorial vigente o los que ameritaban ser derivados a otros componentes del *Programa de Reforma de la Educación Superior (PRES)*. En estos casos se tomaron los proyectos subsiguientes de la lista ².

**Programa de apoyo a las
universidades nuevas o
con problemas especiales**

El total asignado para distribuir entre estas universidades es de \$ 9,5 millones. En los mismos términos que con las universidades llamadas históricas, se ha estudiado el tratamiento que se le dará a las universidades nuevas o con problemas especiales. Para ello se constituyó una Comisión Técnica Asesora que tuvo como cometido elaborar una propuesta para la distribución de los fondos asignados a este conjunto de universidades, luego de un análisis detenido de cada caso. En lo que hace a infraestructura, tratándose de universidades nuevas, deberá ser explorada -con mayor razón que en el caso de las instituciones preexis-

tentes- la alternativa de cesión o acuerdo para el uso de terrenos o edificios inactivos del sector público, antes de la aprobación de cualquier erogación.

Notas

¹ En España, por ejemplo, la inversión de las universidades ha estado en los últimos años por encima del 15% de sus gastos totales.

² Otro caso excepcional fue el de la UTN, que no pudo ser considerada para la asignación de recursos adicionales ya que no priorizó proyectos sino Unidades Regionales, ubicando en primer lugar a la Regional Buenos Aires, cuyo proyecto para su sede central demanda 10 millones de pesos en el Ejercicio 1997, una cifra equivalente al total de recursos asignables al conjunto de universidades creadas a partir de 1990 y a las que tienen "problemas especiales".

Actualización Académica de Profesores

El Programa de Actualización Académica para Profesores de Profesorados fue creado como respuesta del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación a la necesidad de garantizar la calidad de la formación docente que la transformación del Sistema Educativo requiere.

EL PROGRAMA de Actualización Académica para Profesores de Profesorados, conocido habitualmente como Circuito E, se inserta en el marco de la Red Federal de Formación Docente Continua, que ofrece, en forma gratuita, oportunidades de capacitación para docentes del sistema educativo actualmente en servicio.

Fue creado como respuesta del Ministerio

de Cultura y Educación de la Nación a la necesidad de **garantizar la calidad de la formación docente** que la transformación del Sistema Educativo requiere.

Su objetivo es actualizar la formación académica (enfoques teóricos, contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales) de los profesores en actividad de

los Institutos de Formación Docente, en función de los requerimientos de los nuevos Contenidos Básicos Comunes de los distintos niveles del Sistema Educativo.

Para su implementación se ha puesto en marcha un circuito nacional de cursos de actualización en las distintas disciplinas que integran el curriculum de los Institutos de Formación Docente.

LOS CURSOS tienen una carga horaria de aproximadamente 300 horas distribuidas a lo largo de dos años y medio y privilegian la modalidad presencial. Incluyen, además, un módulo de capacitación informática. La incorporación de este módulo tiene, como objetivo de mínima, dotar a los profesores de profesorado de las herramientas básicas de comunicación y manejo de la información para un mejor desempeño de su tarea docente. El objetivo de máxima, sin embargo, es lograr que estas herramientas se integren a la didáctica de la disciplina.

Son dictados por instituciones universitarias seleccionadas a través de *Concursos de Propuestas de Nivel Nacional*. Esta modalidad del Programa tiende a garantizar una adecuada oferta académica que alcance de manera equitativa todas las regiones del país.

Pueden presentarse a estos concursos equipos conformados por profesores titulares, asociados y adjuntos regulares; docentes categorizados A, B o C; Investigadores Superiores del CONICET o de Institutos de investigación reconocidos o docentes universitarios con maestría o doctorado.

La selección de las propuestas se realiza mediante *Concurso Nacional* para cuya elaboración las unidades académicas tienen como base núcleos temáticos orientadores establecidos por una Comisión Académica Asesora, integrada por especialistas de reconocido prestigio.

El primer año de vida del programa

♦ *La demanda de cursos por parte de las Provincias.*

Las provincias definen el cronograma y la sede de los cursos así como las disciplinas que tienen prioridad en la actualización de sus profesores. En 1996 participaron del Programa 16 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, totalizando una demanda de 85 cursos que preveía la participación de 4.600 profesores de profesorado.

En el Gráfico 1 se presenta la demanda de las disciplinas que fueron concursadas.

Cuadro 1: Participación de las provincias en la demanda de Cursos

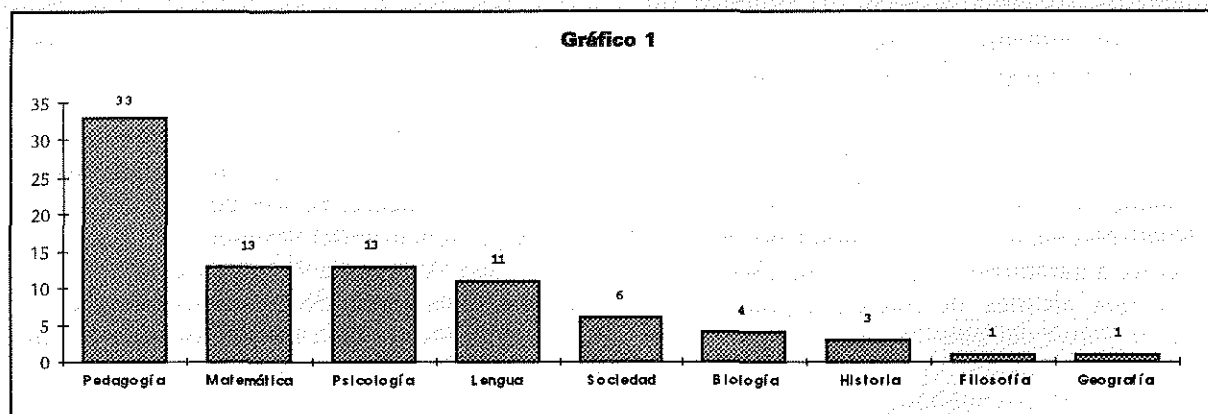
Provincia	Nº de Cursos
Buenos Aires	13
Córdoba	2
Chaco	4
Chubut	3
Entre Ríos	6
Formosa	9
La Pampa	2
Mendoza	4
Misiones	2
M.C.B.A.	6
Neuquén	7
Río Negro	4
Santa Cruz (con Chubut y T. del Fuego)	5 *
Santa Fé	11
Santiago del Estero	6
Tierra del Fuego	1**

Fuente: Memoria Anual 1996

* Cursos Regionales

** 1 Curso provincial y 4 Cursos Regionales

Áreas disciplinarias	Nº de cursos
Pedagogía	33
Matemática	13
Psicología	13
Lengua	11
Sociedad, Sistema Educ. e Inst. Esc.	6
Biología	4
Historia	3
Filosofía	1
Geografía	1
TOTAL: 85 cursos	



♦La participación de las Universidades en los primeros llamados a concursos.

Para dar respuesta a esa demanda, se realizaron tres convocatorias de las que participaron 55 universidades. Durante 1996, 17 de éstas resultaron adjudicatarias de 70 cursos de los que están participando 3.600 profesores de profesorado.

Cuadro 2: Distribución de cursos adjudicados a las Universidades

Univ. adjudicatarias	Nº de Cursos
Univ. Nac. de Rosario	13
Univ. Nac. de la Plata	12
Univ. de Buenos Aires	12
Univ. Nac. de Córdoba	7
Univ. Nac. de Cuyo	3
Univ. Nac. de La Pampa	2
Univ. Nac. de Entre Ríos	2
Univ. Nac. de Mar del Plata	2
Univ. Austral	2
Univ. Nac. de San Luis	2
Univ. del Salvador	2
Univ. Nac. del Nordeste	2*
Univ. Nac. de la Patagonia S.J.B.	2
Univ. Nac. de Quilmes	2
FLACSO	2
Univ. de Morón	1
Univ. Nac. de Tucumán	1
Univ. Nac. del Centro	1
Univ. Nac. del Litoral	1

Fuente: Memoria anual 1996

* 1 Curso compartido con UNQuilmes

La cobertura geográfica de las diferentes universidades, de acuerdo a los cursos adjudicados, se representa en el siguiente cuadro:

Cuadro 3: Localización geográfica de los cursos adjudicados a las Universidades

Universidad	Provincia	Nº de Cursos
Buenos Aires	M.C.B.A.	3
	Buenos Aires	1
	Sgo. del Estero	2
	Formosa	2
	Neuquén	2
	Misiones	1
Nac. de Rosario	Río Negro	1
	Buenos Aires	1
	Chubut	1
	Santa Fé	6
	Formosa	2
	Neuquén	2
Nac. de La Plata	La Pampa	1
	Buenos Aires	3
	Chubut	1
	Chubut	1
	Chaco	1
	Sgo. del Estero	2
Nac. de Córdoba	Formosa	3
	Entre Ríos	1
	Buenos Aires	1
	Chubut	1
	Córdoba	1
	Chubut/Sta.Cruz/T.Fgo.	1
Nac. de Mar del Plata	Formosa	1
	Neuquén	1
	Sta Fe	1
	Río Negro	1
	Chubut/Sta.Cruz/T.Fgo.	1
	Mendoza	3
Nac. de Cuyo del Salvador	Buenos Aires	1
	Chubut/Sta.Cruz/T.Fgo.	1
Nac. de La Patagonia S.J.B.	Tierra del Fuego	1
	Chubut y Sta.Cruz	1
Austral	Sgo. del Estero	1
	Río Negro	1
Nac. de Entre Ríos	Entre Ríos	2
Nac. de La Pampa	Formosa	1
	Entre Ríos	1
Nac. de San Luis	Neuquén	1
	La Pampa	1
Nac. de Quilmes	Buenos Aires	1
	Chaco	1
Nac. del Nordeste FLACSO	Chaco	2*
	Entre Ríos	1
Morón	Córdoba	1
	Buenos Aires	1
Nac. del Litoral	Santa Fe	1
Nac. del Centro	Misiones	1
Nac. de Tucumán	Sgo.del Estero	1
Nac. del Comahue	Neuquén	1

* 1 Curso compartido con la UNQuilmes.

El Programa en 1997

Recientemente, se ha abierto un concurso para cubrir el dictado de 200 cursos de los cuales participarán 9.185 profesores de profesorado. De adjudicarse la totalidad de los cursos, a fines del 97 estaría incorporado al proceso de actualización académica aproximadamente el 70 % de la población objetivo del Programa, estimada en 18.000 profesores de profesorado. El restante 30 % se incorporaría en 1998.

♦El reconocimiento académico de las universidades a los cursos de Actualización Académica para Profesores de Profesorado

La universidad responsable otorgará un *certificado universitario* a los profesores de profesorado que aprueben la evaluación final de los cursos.

Por otra parte, en la presentación al concurso, las universidades convinieron en una *propuesta de reconocimiento académico de los cursos como parte de la carrera de grado o de posgrado*, según el título de base de los destinatarios. Las modalidades, alcances y grado de definición de esa propuesta de reconocimiento varía considerablemente de universidad a universidad pero, desde el Programa, ya se está trabajando con las universidades que resultaron adjudicatarias para definir mejor o buscar alternativas de reconocimiento que den cuenta del avance académico que la aprobación de estos cursos supone para los participantes.

Si se tiene en cuenta el alto perfil de los equipos docentes a cargo de los cursos, la calidad de los diseños académico-pedagógicos seleccionados a través de un concurso nacional y carga horaria de los mismos, es indudable que estamos frente a cursos de excelencia. Su aprobación supondrá por lo tanto una performance académica de los participantes que puede ser convalidada desde el actual sistema de grado o postgrado universitario a través de un sistema de equivalencia u otras alternativas. En este sentido se está trabajando actualmente.

Algunas universidades, como la **Universidad Nacional de Rosario**, cuentan con una resolución del Consejo Superior, en la que se propone el otorgamiento de un *Certificado de Estudios Universitarios*, que deberá ser aprobado por el Consejo Directivo de cada Facultad responsable del dictado del curso. Cada Facultad elaborará los criterios específicos para el estudio y tratamiento de los pedidos de equivalencia de los responsables docentes de los cursos, de acuerdo a la formación de base de los participantes, que podría llegar hasta el reconocimiento del 75 % de la carrera.

La **Universidad Nacional de La Pampa** estableció un sistema, (que aún no cuenta con resolución del Consejo Superior), de reconocimiento universitario en el área disciplinaria de Historia, para profesores egresados de instituciones superiores no universitarias, que consiste en un *Certificado de Curso de Actualización en Historia*, así como un régimen de equivalencias para el *Profesorado de Historia*. Para cursantes egresados de instituciones universitarias, se propone un reconocimiento a nivel de *Certificado de Curso de Postgrado de Actualización en Historia* y el reconocimiento del título de Profesor, para su inscripción en la *Licenciatura de Historia y Geografía*.

La **Universidad de Buenos Aires** ha convenido en el área específica de Matemáticas la aprobación por equivalencias de hasta 6 (seis) cursos de la Licenciatura en Ciencias Matemáticas, mientras que, en el área de Pedagogía, la Facultad de Filosofía y Letras otorgará el reconocimiento del *Curso de actualización académica* dictado por la Institución. La reglamentación general de la UBA no obstante, incluye el compromiso de tramitar la posibilidad de equivalencias con las respectivas unidades académicas.

La **Universidad Nacional de Córdoba** no dispone de reglamentación a nivel de Consejo Superior y las Facultades participantes en el dictado de los cursos actuales proponen un reconocimiento de los respectivos cursos como *Cursos de especialización*. La posibilidad de equivalencias se evaluará a través de las Comisiones de Asuntos Académicos de las Facultades, las que deberán resolver en cada caso particular.

La **Universidad Nacional de La Plata** propuso un régimen de reconocimiento, a través de una certificación otorgada por la Secretaría de Extensión Universitaria, como *Cursos de perfeccionamiento y actualización docente*.

Otras universidades no presentan una propuesta desarrollada sobre el sistema de reconocimiento, si bien garantizan el tratamiento de cada caso particular, para establecer los criterios de equivalencias y el carácter del certificado universitario a otorgar.

El lugar de la evaluación institucional en la política universitaria de los '90*

por Eduardo Sánchez Martínez

Quisiera en primer lugar aprovechar la oportunidad que me ofrecen de poder compartir este espacio que ustedes han generado para reflexionar sobre Evaluación Institucional y Calidad de la Enseñanza Universitaria. Mi propósito en este marco, es compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el lugar que asignamos a la evaluación institucional en la política universitaria de este fin de siglo.

** Este texto resume la exposición del autor en las Primeras Jornadas de Evaluación Institucional y Calidad de la Enseñanza Universitaria, Universidad Blas Pascal, Córdoba, 27 y 28 de febrero de 1997.*

1. La política universitaria y sus principales objetivos

Al comenzar la década de los noventa, casi todos los diagnósticos sobre el sistema universitario argentino coincidían en que el país presentaba un llamativo atraso en sus planes de desarrollo universitario respecto de las naciones más avanzadas de la región y del mundo¹.

Algunos rasgos característicos de la situación eran:

- ♦ la prolongada desinversión en el sector;
- ♦ el fuerte crecimiento de la matrícula -sobre todo en los años '80- sin la necesaria disponibilidad y preparación de recursos humanos, financieros y materiales para contenerla;

- ♦ la ausencia de estímulos para la formación de posgrado de los profesores universitarios, salvo quizá en las llamadas ciencias duras;
- ♦ el escaso profesionalismo en el gerenciamiento y administración de las universidades;
- ♦ el escaso rendimiento académico;
- ♦ el aislamiento de la universidad de su entorno social y particularmente de los ámbitos de la producción;
- ♦ la ausencia de procedimientos racionales y eficaces para articular la educación media con el nivel universitario;
- ♦ la persistencia de mecanismos inerciales para la asignación presupuestaria.

En ese marco, una política universitaria consecuente con los datos de la realidad debía tender, en lo esencial, a impulsar un proceso de transformación estructural del sistema universitario argentino.

El objetivo mayor de ese proceso no podía ser otro que el de contribuir a mejorar la calidad de las universidades: de la formación que ofrecen, la investigación que desarrollan y los servicios que prestan. Por otra parte, ese objetivo debía ser compatible con la búsqueda simultánea de una mayor eficiencia en la organización y gestión de las universidades y de una mayor equidad tanto en la asignación de recursos como en las posibilidades concretas de que los estudiantes de menores recursos, con voluntad y capacidad de estudiar, pudieran tener acceso y avanzar en sus estudios.

Si la búsqueda de una mejor calidad es siempre un objetivo complejo -difícil de definir y de alcanzar, que requiere en consecuencia políticas también complejas y de largo alcance- ello se complica sobrema-

nera cuando tal propósito se plantea simultáneamente con objetivos de eficiencia y equidad. Es relativamente simple mejorar ciertos indicadores como las tasas de graduación, o la duración real de los estudios haciendo todo más fácil, menos exigente, más «light», como ahora se dice. Pero ello no sería consistente con la idea de excelencia propia de una institución universitaria, sólo aplicable a aquellas que proponen altas expectativas y metas a todos los estudiantes, y luego procuran, por todos los medios posibles, ayudarlos a alcanzarlas. De ahí la importancia de encontrar medios adecuados para asegurar la calidad en un contexto que presenta problemas de eficiencia y que nos exige por ello trabajar también en el objetivo paralelo de mejorar el rendimiento.

Pero haré una simplificación y dejaré de lado aquí los componentes de la política universitaria vinculados con la eficiencia y la equidad, para comentar brevemente el papel que se asigna a la evaluación institucional en la política universitaria de estos años destinada a promover la calidad.

2. La evaluación como instrumento de política

El diseño y la puesta en práctica de mecanismos de evaluación y acreditación institucional, aparece como uno de los instrumentos privilegiados de la política de mejoramiento de la calidad universitaria. No es necesario exponer aquí las razones que explican la importancia que se le asigna, no sólo porque son ampliamente conocidas y crecientemente aceptadas desde el punto de vista teórico -que ya no discute la conveniencia de la evaluación sino en todo caso la forma de concebirla e instrumentarla- sino también porque hoy es parte relevante de la experiencia comparada.

A medida que los sistemas de educación superior han ido creciendo, ganando en

extensión y complejidad, se ha hecho necesario encontrar formas de evaluar con propósitos de mejoramiento y de acreditar en vistas a garantizar niveles de formación adecuados.

En el caso argentino, hay una razón adicional que justifica esa preocupación: en nuestro sistema el Estado delega en las instituciones universitarias no sólo la función de certificar los conocimientos académicos adquiridos, sino también la de habilitar para el ejercicio profesional, lo que acarrea amplias y fundamentales responsabilidades sociales.

Desde este punto de vista, es necesario garantizar a la sociedad en su conjunto, que los profesionales están siendo formados de acuerdo a estándares de calidad aceptables, que tienen capacidad para actualizar sus conocimientos una vez que se han graduado y que su formación integral es adecuada para hacer frente a los compromisos profesionales y éticos que involucra el desempeño de las profesiones en el mundo de hoy.

Por supuesto, la evaluación también es necesaria para proporcionar elementos de juicio para la toma de decisiones, así como para facilitar la movilidad, la cooperación y la emulación entre las diferentes universidades. Pero, en mi opinión, hay una razón todavía más importante: la evaluación es, o debiera ser, una forma de responder a las exigencias internas de las propias universidades de mejorar la calidad: *«por su propia naturaleza la universidad tiene una vocación irrenunciable de excelencia académica y científica, que la obliga a una mejora continua de la calidad de los servicios que presta a la sociedad en el campo de la enseñanza, la investigación y la cultura»*². Es tal vez ésta la razón última y fundamental por la cual las universidades y los universitarios debemos ocuparnos de estar atentos siempre a lo que hacemos, analizar sus resultados, descubrir sus

falencias, revisar, cuando corresponda, la forma como hacemos eso que hacemos, todo en vistas a dos propósitos principales: a) mejorar el servicio con el que estamos comprometidos y b) ofrecer a la sociedad más y mejor información sobre lo que hacemos y sobre sus resultados, incrementando la transparencia de todo el sistema.

3. El camino recorrido

En Argentina, en materia de evaluación institucional hemos recorrido un camino poco extenso en el tiempo -es tema que nos importa de modo más o menos generalizado recién a partir de los primeros años de la presente década- pero bastante intenso en el tráfico, esto es, en los hechos que en esa materia han ido ocurriendo.

a) Principales etapas

C. Marquis³ ha propuesto una sistematización en tres fases o etapas que ayuda a ubicar los hechos de esta breve y a veces conflictiva historia.

(i) Entre 1991 y 1993, aproximadamente, tiene lugar lo que se ha denominado la «instalación» del tema a nivel nacional. Son años de sensibilización de los actores involucrados, de debate, de jornadas, de congresos, de encuentros, de discusiones sobre cuestiones conceptuales y metodológicas. ¿Qué es, en este campo, la "calidad"? ¿Es posible, en este área, evaluar la calidad? Si lo es, ¿quién debe evaluarla?, fueron algunos de los interrogantes en torno a los cuales se polemizó por esos años.

(ii) Sin que estas preguntas y preocupaciones desaparecieran por completo - en realidad son tan complejas y tienen tales implicaciones que es inconcebible que desaparezcan- puede ubicarse un segundo momento en este corto recorrido, entre 1993 y 1995, que se ha propuesto denominar como «legitimación» del tema en el ambiente uni-

versitario. En esta segunda etapa, el acento estuvo puesto en cuestiones de orden metodológico, cómo hacer la evaluación, qué indicadores utilizar, cómo obtener la información para construirlos, cómo involucrar a los actores.

Tal vez el hecho más relevante de esta fase fueron los convenios firmados entre una veintena de universidades y la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, destinados a aunar esfuerzos para desarrollar trabajos de evaluación de los cuales se derivaran planes y programas para el mejoramiento de la calidad universitaria.

Estos convenios impulsados por la Secretaría dieron lugar a un conjunto de experiencias piloto en varias universidades, que lograron poner en marcha procesos exitosos de auto-evaluación y luego de evaluación externa con resultados a la vista. En otros casos el avance tuvo algunas dificultades, fue más lento, y está aún en proceso de desarrollo. Pero todos hemos aprendido y hoy contamos con un conjunto de «lecciones de la experiencia» que están sirviendo a los que empezaron más tarde en esta empresa para ayudarles a recorrer el camino con cierta perspectiva de éxito, y sobre todo, para no cometer errores, para saber lo que no se debe hacer si se quiere llegar a buen puerto.

Otra experiencia de singular interés en esta materia que tuvo lugar en esta etapa fue la primera acreditación de carreras de posgrado en nuestro país.

Todas estas experiencias fueron despejando los temores y dudas que la evaluación siempre plantea en sus comienzos y fueron abriendo el camino para su gradual afianzamiento y consolidación.

(iii) Puede decirse que la tercera etapa, en la que estamos, comienza en 1995. Atravesamos un momento de «institucionalización» de la evaluación y la acreditación universitaria. Se ha propuesto llamarla así porque es por entonces que el Congreso de la Nación sanciona un marco regulatorio para el conjunto de la educación superior, que incorpora la evaluación institucional como uno de sus ejes centrales.

Vale la pena, en este contexto, hacer algunos comentarios que permitan perfilar

el marco institucional en que la evaluación tiene hoy lugar.

b) El marco institucional

Lo primero que se debe subrayar es que en ese marco institucional la evaluación aparece como *un instrumento concebido para contribuir al mejoramiento de la calidad* y no como un sistema de control burocrático. Su objeto, en efecto, no es la fiscalización sino el análisis de los logros y debilidades en el cumplimiento de las funciones universitarias, para sugerir a partir de ello las medidas correctivas que se crean apropiadas.

Como la posible colisión entre evaluación y autonomía fue en su momento un tema altamente polémico -lo que es comprensible porque, según cómo se la conciba, la evaluación puede efectivamente interferir en el ámbito de acción reservado a cada institución- conviene saber que, de acuerdo a la ley, *la evaluación debe hacerse teniendo en cuenta los objetivos definidos por cada institución*. Es en función de tales objetivos, y no de otros parámetros, que debe emitirse el juicio crítico que supone todo proceso de evaluación. Por cierto, nadie desconoce que en ocasiones también pueden ser objeto de evaluación los objetivos mismos, en la medida que éstos sean tan poco ambiciosos o tan mediocres que su logro, aun pleno, no implique estar ofreciendo una formación o una investigación de calidad. Por lo demás, aunque los patrones de referencia sean los objetivos de la propia institución, la comparación con los estándares y logros de otros y la consecuente emulación son funciones que se espera cumpla cualquier proceso de evaluación de un sistema.

La evaluación, tal cual está concebida en nuestro marco normativo, supone como paso previo la *autoevaluación*, a partir de cuyo informe se plantea la necesidad de llevar a cabo una *evaluación externa*. Aunque en ocasiones resistida por su eventual interferencia con la autonomía universitaria, la mirada desde afuera parece imprescindible para superar los fenómenos de endogrupo y evitar las autojustificaciones,

tan engañosas como inútiles para el objetivo de mejorar la calidad.

Otro aspecto al que conviene atender cuando se analizan las normas que regulan nuestro sistema de evaluación y acreditación, es que éstas *pueden quedar a cargo, sea de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) -un cuerpo estatal de carácter autárquico que actúa con independencia de criterio- sea de entidades privadas autorizadas especialmente para evaluar y acreditar.* En las dos alternativas se prevé una serie de recaudos para asegurar la indispensable independencia de criterio que cualquier proceso de evaluación requiere. Además, en las dos alternativas el juicio crítico que supone toda evaluación debe quedar a cargo de pares académicos de reconocida competencia y jerarquía, como una garantía más del carácter académico que se asigna al proceso.

4. El camino por recorrer

El camino recorrido, poco extenso en el tiempo, ha sido sin embargo bien intenso en hechos y experiencias. En poco más de un lustro, sin dejar de discutir los interrogantes de fondo que nunca se deben dejar de discutir y de plantear, la mayoría de las universidades está llevando a cabo -con distinto grado de avance, es verdad- su propia evaluación. Las dudas no son ya si se debe evaluar o no sino más bien cómo hacerlo con provecho para todos, sin desnaturalizar sus verdaderos propósitos. En poco más de un lustro, tenemos experiencias completas de evaluación externa y de acreditación de posgrados, se ha logrado definir y adoptar un marco institucional que regula la evaluación y la acreditación para el conjunto del sistema universitario argentino, se ha constituido y está en plena labor un cuerpo colegiado independiente que tiene por principal función llevar adelante los procesos de evaluación externa y de acreditación y se han puesto en marcha programas destinados a apoyar las

transformaciones y cambios que las evaluaciones han demostrado necesarios.

No es poco.

El camino que queda por recorrer no es sin embargo fácil ni breve. Hay varios avances que hacer y varios desafíos a los que responder.

a) De las experiencias piloto a una aplicación generalizada

El primer desafío que tenemos por delante es avanzar en la aplicación generalizada del sistema de evaluación previsto en la Ley de Educación Superior. Es un sistema interesante pero complejo. La magnitud del trabajo que tiene entre sus manos la Comisión de Evaluación y Acreditación es realmente importante, tanto por la dimensión cuantitativa del universo como por las características cualitativas complejas del proceso que debe llevar adelante.

Frente a este panorama hay algunas reglas de buen gobierno que orientarán todo el proceso: *firmeza*, porque somos responsables de aplicar políticas públicas que derivan de las normas sancionadas por el Congreso de la Nación, y también, porque estamos convencidos, luego de una atenta mirada a la experiencia comparada, que se trata de una dirección correcta en vistas al objetivo de mejorar la calidad; *prudencia*, no sólo porque ésta es una de las cuatro virtudes cardinales -discernir y distinguir lo que es bueno de lo que es malo, para seguirlo o huir de ello- sino también por la complejidad de lo que está en juego, tan susceptible siempre de provocar percepciones inadecuadas o de generar conflictos con frecuencia estériles; *gradualidad*, que no se contraponen a la firmeza, porque de nada serviría, en un tema de esta naturaleza, pretender lograrlo todo en pocos meses para estar luego en el punto de partida o quizá más atrás; *transparencia*, en fin, porque toda política pública que no la tuviera en cuenta no sólo iría a contrapelo de la historia sino que sería contradictoria con uno de los propósitos centrales de toda evaluación.

b) De la primera evaluación a una cultura de la evaluación

El segundo desafío que debemos enfrentar es lograr avanzar de una primera experiencia de evaluación a una «cultura» de la evaluación. La evaluación servirá para algo cuando todos estemos convencidos de que la búsqueda permanente de la excelencia -ese deber irrenunciable que la universidad tiene de proponer siempre metas y estándares más exigentes y luego procurar por todos los medios posibles ayudar a alcanzarlos- hace a la naturaleza misma de la institución a la que pertenecemos, que ello es una obligación de todos, y que el repensar individual y colectivamente lo que hacemos contribuye sustantivamente a lograrlo. De poco sirven las evaluaciones esporádicas, que sólo se hacen para enmascarar la realidad, para autojustificarnos o para cumplir formalidades.

Lo que necesitamos es una cultura de la evaluación, que ayude a cumplir esa vocación irrenunciable de excelencia que es propia de la universidad y que la obliga a una mejora continua de la calidad de los servicios que presta.

c) De la evaluación al mejoramiento de la calidad

En fin, el tercer desafío al que debemos responder es encontrar los medios para avanzar de la evaluación al mejoramiento de la calidad. La evaluación por sí misma no mejora mágicamente la realidad ni transforma la mediocridad en excelencia. Su valor está en que es capaz de hacernos ver lo que estamos haciendo a medias o lo estamos haciendo mal, para emprender a partir de ello acciones y reformas que lleven a un mejoramiento. Pero el nexo entre procedimientos de evaluación y mejoramiento de la calidad es todavía muy tenue entre nosotros, especialmente cuando concebimos los mecanismos de evaluación simplemente como un conjunto de rituales para cumplir una formalidad o para obtener la aprobación de una nueva carrera o programa de formación.

A partir de las debilidades que detecta la evaluación, el desafío consiste en ser ca-

paz de diseñar y desarrollar un conjunto de programas y acciones para encarar la corrección de las dificultades encontradas. Y por cierto, en encontrar los medios para ello.

Concebimos esto como una responsabilidad que deben compartir el Estado y las universidades. Para aquél, implica la obligación de encontrar recursos y desarrollar programas que lo hagan posible, y como se sabe, ya existen algunos de ponderable envergadura. Para las universidades, la evaluación puede ayudar a formular un «plan de gobierno» que contribuya al mejoramiento de la calidad, para lo cual deben luego gestionar todos los medios necesarios para llevarlo adelante.

La evaluación ayuda, pero obviamente no obliga a proponerse metas de mejoramiento. Es sólo su *ethos* académico, su compromiso irrenunciable con la excelencia, así como su deber para con la sociedad que las sostiene, lo único que puede garantizarlos que efectivamente lo hagan. Si no lo hacen, habrán entrado en una fase de deterioro y decadencia difícilmente superable en un mundo que exige calidad y en el que sólo caben quienes diariamente se esfuerzan por lograrla y ofrecerla.

Notas

¹ Sigo en esta caracterización diagnóstica a C. Marquis, «De la Evaluación a las Reformas en el Sistema Universitario Argentino», Revista Educación Superior y Sociedad (CRESALC/UNESCO), en prensa.

² Consejo de Universidades (de España), Programa de Evaluación Institucional de la Calidad de las Universidades, Ministerio de Educación y Ciencia, Consejo de Universidades, Secretaría General, Madrid, 1995.

³ C. Marquis, «El rol del Estado frente a la evaluación de la calidad universitaria. El caso argentino», comunicación presentada en la Conferencia Regional de UNESCO sobre Políticas y Estrategias para la Transformación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, La Habana, Cuba, noviembre de 1996.

Programa

Nacional de

Becas

Universitarias

En el marco de la transformación del sistema de educación superior, el Programa de Becas Universitarias apunta a distribuir -de acuerdo a criterios y procedimientos transparentes- alrededor de 2.250 becas anuales a estudiantes destacados de las universidades nacionales con dificultades para afrontar el costo de sus estudios de grado. Estas becas tienen como objetivo asegurar la continuidad de sus estudios, siempre que acrediten un buen desempeño académico, intentando introducir -ciertamente que de modo limitado- mecanismos compensatorios, que apuntan a una prestación más equitativa del servicio de enseñanza superior.

El Programa se puso en marcha el año pasado con la entrega de 1500 becas, que se distribuyeron del siguiente modo entre las Universidades Nacionales:

Buenos Aires (UBA): 123; Patagonia Austral 3; Catamarca 12; Córdoba: 214; Cuyo: 65; Entre Ríos: 11; Formosa: 100; General San Martín: 2; Jujuy: 28; La Matanza: 33; La Pampa: 20; La Patagonia San Juan Bosco: 17; La Plata: 79; La Rioja: 25; Lomas de Zamora: 11; Luján: 15; Mar del Plata: 12; Misiones: 52; Quilmes: 16; Río Cuarto: 19; Rosario: 56; Salta: 31; San Juan: 75; San Luis: 56; Santiago del Estero: 26; Tucumán: 98; Centro: 18; Comahue: 52; Litoral: 24; Nordeste: 39; Sur: 32; Tecnológica Nacional: 134; Inst. de Enseñanza Superior del Ejército 1; Inst. Universitario Aeronáutico: 1

En 1997 se otorgarán 2266 becas de 3000 pesos anuales luego de una rigurosa selección de los postulantes que se presentaron a la convocatoria abierta entre el 24 de marzo y el 18 de abril.

Autoevaluación

Universitaria:

asistencia técnica

e intercambio

de experiencias

Con la sanción de la Ley 24.521 y la posterior constitución de la CONEAU como organismo descentralizado, las actividades de la SPU tendientes a desarrollar la evaluación universitaria han quedado circunscriptas al impulso de la autoevaluación.

Esto se realizó brindando asistencia técnica a las universidades que lo solicitaban y auspiciando encuentros que permitiesen el intercambio de experiencias entre los equipos de las universidades.

A través del seguimiento y sistematización de los procesos de evaluación realizados en el marco de los convenios firmados con universidades y asociaciones de facultades, se reunió cierta experiencia que fue transferida a las universidades que estaban por comenzar la autoevaluación y lo requerían.

El análisis de las experiencias de evaluación permitió extraer algunas conclusiones provisionales acerca de las dificultades más comunes que se presentan, tanto en aspectos organizativos como metodológicos.

Durante 1996, en el marco de estas actividades de asistencia técnica, se mantuvieron reuniones de trabajo con más de veinticinco universidades argentinas, se visitó a quince de ellas y se auspiciaron dos encuentros regionales.

En estas reuniones de trabajo, las autoridades académicas y los miembros de los equipos o comisiones de evaluación pudieron conocer lo que estaban haciendo otras instituciones, lo que facilitó el diseño de los propios procesos. La SPU acrecentó el conocimiento de las particularidades que presenta la autoevaluación en los diferentes casos y, en base a ello, podrá mejorar las propuestas para favorecer las distintas experiencias.

Los seminarios regionales estuvieron destinados a favorecer el intercambio entre los equipos de las universidades. Uno fue organizado por la Universidad Nacional de Tucumán, con la adhesión de las otras universidades del NOA, los días 18 y 19 de septiembre de 1996, y el otro, por la Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco", los días 16, 17 y 18 de octubre de 1996. En ambos casos la SPU facilitó la visita de expertos extranjeros, que aportaron lo que aprendieron en sus países después de varios años de ejercicios de evaluación. Además, hubo paneles en los que las universidades nacionales que culminaron sus procesos o hicieron avances significativos pudieron exponer sus aprendizajes.

Para 1997, la SPU proseguirá sus tareas de asistencia técnica y difusión de experiencias, con el objeto de favorecer la extensión de las prácticas de autoevaluación en las universidades que aún no las han adoptado.

Se continuará visitando las universidades que lo solicitan y manteniendo reuniones con las autoridades y con quienes tienen a su cargo desarrollar las autoevaluaciones, porque se ha advertido que éstas son actividades que estimulan los procesos internos de las instituciones.

Como consecuencia de la observación y el análisis de una multiplicidad de casos singulares de autoevaluación, se está trabajando para formular herramientas y propuestas que faciliten las tareas de las universidades.

La capacitación de las personas que asumen las tareas de evaluación es una tarea pendiente y deberá ser encarada a través de la cooperación interinstitucional.

jornadas de evaluación institucional en la Universidad Blas Pascal

La Universidad Blas Pascal, con el apoyo de la SPU, organizó durante los días 27 y 28 de febrero del corriente año, las "*Primeras Jornadas de Evaluación Institucional y Calidad de la Enseñanza Universitaria*".

El objetivo de las jornadas, que se inscribieron en el proceso de autoevaluación que está desarrollando la universidad organizadora, fue reflexionar sobre el papel que debe cumplir la evaluación institucional y su relación con la calidad de la enseñanza universitaria.

Las jornadas mostraron que la preocupación dominante en relación al tema está referida a las cuestiones metodológicas e instrumentales, dado que ya existe en la mayoría de los casos conciencia de la conveniencia de la autoevaluación.

La modalidad de trabajo consistió en dos tipos de actividades: exposiciones de conferencistas y trabajos en comisión.

La apertura estuvo a cargo del Rector de la Universidad, Dr. Rafael Cecconello, y fueron expositores el Lic. Eduardo Sánchez Martínez (Secretario de Políticas Universitarias), el Dr. Emilio Mignone (Presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria), el Dr. Moisés Silva Triviño (Director de la Oficina de Evaluación

Institucional, Universidad de Concepción, Santiago-Chile), el Dr. Héctor Sauret (Secretario Ejecutivo Permanente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas), la Dra. Estela María Miranda (Prof. Adjunta a cargo del Taller IV: "Problemática Educativa del Nivel Superior Universitario", Universidad Nacional de Córdoba) y la Lic. Gladys Ambroggio (Prof. Titular Regular de la Cátedra "Metodología de la Investigación Educativa", Universidad Nacional de Córdoba).

Las comisiones de trabajo se organizaron según los siguientes temas: 1) La política educativa universitaria y la evaluación institucional; 2) La calidad de la enseñanza universitaria; 3) La evaluación institucional como investigación evaluativa y 4) Diseños de evaluación institucional.

Presentaron ponencias investigadores de las Universidades Nacionales de Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, La Plata, San Juan, de la Universidad Tecnológica Nacional, del Instituto Tecnológico Universitario, de la Universidad Blas Pascal y de la Dirección Nacional de Programación y Coordinación Institucional de la SPU.

El clima general de las jornadas fue muy participativo, lo que pone de manifiesto la relevancia del tema en las instituciones universitarias. Fueron muy bien recibidas las ponencias que relataban experiencias de autoevaluación, porque posibilitan que las instituciones que aun no han comenzado a transitar estos caminos aprendan de lo hecho.

Primer Seminario sobre Evaluación Universitaria

Las universidades del Conurbano bonaerense y la SPU están organizando el *Primer Seminario sobre Evaluación Universitaria*, que se realizará en la Universidad Nacional de La Matanza, los días 23 y 24 de abril próximo.

El objetivo del seminario es favorecer el in-

tercambio de experiencias de autoevaluación, en especial en lo referido a los diseños y metodologías empleados.

Está prevista la participación de tres expertos extranjeros: Pierre Cazalis (OUI-Universidad de Quebec); Rocío Llerena de Thierry (SEP/ANUIES, UNAM, México) y Miguel Angel Escotet (UNESCO-CRESALC).

Se realizarán tres paneles: uno referido a tres experiencias de autoevaluación desarrolladas en nuestro país, en el que expondrán los Secretarios Académicos de las Universidades Nacionales de Cuyo, Nordeste y Luján; otro, en el que las universidades organizadoras presentarán los avances que han realizado en autoevaluación; y un tercero dedicado a las perspectivas de las instituciones vinculadas con el tema, en el que participarán el Secretario de Políticas Universitarias, Lic. Eduardo Sánchez Martínez; el Presidente de la CONEAU, Dr. Emilio F. Mignone; el Rector de una institución que ha sido pionera en materia de evaluación, la Universidad Nacional del Sur, Lic. Ricardo Gutiérrez; y el Director Ejecutivo del FOMECE, Lic. Carlos Marquis.



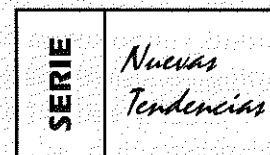
Programa de Publicaciones



La Secretaría de Políticas Universitarias ha presentado la *Guía de Posgrado 1997*, que contiene la oferta de posgrado de universidades nacionales, institutos universitarios nacionales, universidades privadas e institutos universitarios privados. El trabajo fue realizado por el Programa de Mejoramiento del Sistema de Información Universitaria que coordina Marta Kisilevsky, siendo la primera vez que el Ministerio de Cultura y Educación publica una guía de posgrado con información del conjunto de instituciones universitarias del país.

Se incluye el listado de títulos por ramas de estudio, disciplinas y áreas, por instituciones universitarias y por región y un listado de los posgrados acreditados por la Comisión de Acreditación de Posgrados.

La Guía ha sido distribuída en las universidades nacionales y privadas, a las que se enviaron ejemplares para el Rectorado, Secretarías académicas, Secretarías de posgrado, Secretarías de ciencia y técnica, Direcciones de estadística y Bibliotecas de facultades. También se envió a un conjunto amplio de Centros de documentación y bibliotecas de Institutos de Investigación, a los Colegios profesionales y Asociaciones de graduados, a Academias y Fundaciones.



Con el volumen **Nuevas direcciones en el financiamiento de la educación superior**, de José Delfino y Hector Gertel, la SPU inicia la nueva serie de publicaciones: "Nuevas Tendencias".

Esta serie tiene como objetivo difundir diversos esfuerzos que se vienen realizando para generar información acerca de los temas fundamentales que configuran la nueva agenda de la educación superior.

Varios encuentros con especialistas, así como estudios y debates de carácter prospectivo llevados a cabo para discutir los temas más urgentes en el área dan origen a los títulos que formarán parte de la serie.

☞ Nuevas direcciones en el
financiamiento de la educación superior.

J.A. Delfino y H. Gertel
Editores. MCyE. 1996.

☞ Evaluación Institucional

Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza.
1996

Durante los últimos años, se está produciendo una importante transformación económica de las universidades estatales en gran parte del mundo a partir de la cual se observan dos tendencias centrales: por un lado, la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento destinadas a complementar los aportes de los gobiernos y aumentar la autonomía académica, y por el otro, un marcado interés en mejorar la eficiencia del gasto, que se asienta en una creciente asignación de fondos con fines determinados, en una mayor autarquía para su manejo y la incorporación de modelos que ayudan a distribuir el aporte público en base a indicadores objetivos basados en resultados académicos.

Con el objetivo de explorar este último tema, la Secretaría de Políticas Universitarias organizó en 1996 un Seminario Internacional en el que se convocó a especialistas y funcionarios de diferentes instituciones y nacionalidades.

En esta publicación, José Delfino y Héctor Gertel compilan y editan los aportes allí vertidos, configurando un interesante marco al interior del cual se puede comprender y analizar los nuevos desafíos que en la materia debe encarar nuestro país, para llegar a establecer, en el mediano plazo, parámetros más objetivos de distribución de los recursos entre las universidades nacionales. La reciente sanción de la Ley de Presupuesto para 1997 vuelve a este libro de lectura imprescindible para comprender el debate acerca de la asignación de los recursos adicionales entre las universidades.

Hasta hace poco tiempo, la comunidad universitaria argentina se veía involucrada en interminables debates acerca de la evaluación de la calidad universitaria, la mayoría de los cuales terminaba a trescientos sesenta grados de donde había empezado.

Luego de años de trazar largos recorridos intelectuales que sólo llevaban al lugar de origen, en 1993 comenzaron a tomar impulso -no sin resistencia- experiencias concretas de evaluación en las universidades. La Universidad Nacional de Cuyo fue una de las primeras en iniciar este camino que terminó (es una manera de decir) en el año 1995.

Las acaloradas discusiones que se generan en torno a la evaluación universitaria ameritan la lectura de esta publicación que aporta hechos contundentes a la reflexión teórica.

En dos tomos -uno dedicado a la autoevaluación y otro a la evaluación externa- la Universidad Nacional de Cuyo reseña la experiencia de su evaluación institucional, fruto de un proceso llevado a cabo durante 20 meses y que "significó una toma de conciencia de fortalezas y debilidades y abrió el camino a la planificación de proyectos institucionales para cada unidad académica y para la organización en general".



La Universidad ahora

Revista de actualidad universitaria

Publicación del Programa de Estudios sobre la Universidad (PESUN). Universidad de Buenos Aires. Número doble 9 y 10. Noviembre '95/Octubre '96.

Nota central: agenda universitaria 1996. Opinan Harrera, Tobías, Mundet, Veljanovich, Molina, Anro, Mollis, Pérez Lindo, Tiramonti. Sobre la aplicación de la Ley de Educación Superior. Entrevistas: Zaffaroni, Quiroga Lavié, escribe: Talento. Estudios e investigaciones. García Fermo, Furlan, Teobaldo. En la Universidad. Eventos.

Boletín de la Academia Nacional de Educación

Nº 26. Buenos Aires, diciembre de 1996.

Secciones: Noticias de la corporación. Ideas y trabajos. Educación en la Argentina. Educación Internacional. Vida académica.

En este número, la sección Ideas y Trabajos contiene una comunicación sobre "Prejuicios antiguos y modernos en educación", de Jorge Bosch y la sección Educación en la Argentina un informe sobre el Plan Social Educativo.



Propuesta Educativa

Revista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Año 7. Nº 14. Agosto 1996.

Las Reformas Educativas en América Latina. Escuela, comunidad y Participación. Entrevista a Heinz-Elmar Tenorth. Artículos y reseñas de investigación. Comentarios de Libros. Eventos y Congresos.

Pensamiento

Universitario

Año 4 Nº 4/5. Buenos Aires, agosto de 1996. Publicación de la Oficina de Publicaciones del CBC, Universidad de Buenos Aires.

En este número: Evaluación. Posgrado. Ciencia. Docencia. Investigación. Autonomía. Por: Del Bello, Cano, Alvarez, Estebáñez, Follari.

Además: Títulos. Gestión Universitaria. Didáctica. Educación Superior no universitaria. Por: Krotsch, Litwin, Mignone, Mollis, Pérez Lindo, Riquelme.



Calidad en la educación

Publicación del Consejo Superior de Educación de Chile

Docencia universitaria: lo clásico y lo actual. Entrevista a Agustín Squella -rector de la universidad de Valparaíso. Acreditación: alumnos, académicos y autoridades analizan conceptos de universidad y calidad. Estadística: la indispensable información pública en la Educación Superior. Noticias.

noticias noticiasno
ticias noticias no
ticias noticias noti
cias noticias notic-
iasnoticias noticias
noticias noticias n
oticiasnoticias no-
ticias noticias no
ticiasnoticias noti
ciasnoticias notic
ias noticias notici
as noticias noticias
noticias noticias no
ticias noticias notic
ias noticias noticias
noticias noticias no
ticias noticias noti
cias noticias notici
as noticias noticias
noticiasnoticias no
ticias noticias noti
cias noticias notici
as noticias no ticias
noticias noticias no
ticias noticias noti
cias noticias notici
as noticias notici
as noticias notic
ias noticias noticias
noticias noticias no
ticias noticias notic
iasnoticias noticias
noticiasnoticias not

Autonomía Universitaria y Gratuidad

La Cámara Federal de la Provincia de Córdoba confirmó la sentencia del Juez de primera instancia que rechazaba la demanda planteada por la Universidad Nacional de Córdoba en contra de la Ley de Educación Superior N^o. 24.521, y reconoció, por unanimidad de sus miembros, la constitucionalidad de todas sus normas.

Este pronunciamiento se constituye en la primera sentencia de Cámara que recae en este tipo de juicios, que con características similares se han planteado ante distintos tribunales del país, por lo que implica una importante jurisprudencia en favor de la ley. Hasta el presente sólo se contaba con fallos de tribunales de primera instancia, como los dictados por los Jueces de San Juan, Jujuy y La Pampa, que se inclinan también por admitir la constitucionalidad plena de la ley.

En su demanda, la universidad cordobesa cuestionaba algunas normas de la Ley de Educación Superior, por entender que resultaban violatorias del principio de autonomía universitaria recono-

cido por la reciente reforma de nuestra Carta Magna, al que asignaba un carácter absoluto.

El pronunciamiento rechaza esta postura por entender que "la Constitución no reconoce derechos absolutos e irrestrictos sino relativos, susceptibles de reglamentación y de limitación".

Fundado en este criterio, el fallo afirma que "de un análisis integral de la normativa atacada no se desprenden violaciones expresas a la autonomía universitaria. Muy por el contrario -agrega- el texto de la Ley de Educación Superior es un defensor de este principio".

Refiriéndose concretamente a lo prescripto en los artículos cuestionados por la Universidad, la sentencia admite que están fundados en "exigencias que, sin duda alguna, aseguran un mejor rendimiento y un mayor rigor académico", sin que ello implique "inmiscuirse en la potestad normativa de la Universidad", sino que, "por el contrario, debe ser interpretado como el establecimiento de la base mínima para su funcionamiento. No es un retroceso -se afirma-; es brindar un respaldo legal, una herramienta, con la que contarán las universidades para el logro de sus fines".

Por último, el fallo de la Cámara Federal de Córdoba rechaza la impugnación (fundada en el principio de gratuidad establecido en el inc. 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional) al artículo 59 inc. c), que faculta a las universidades a establecer tasas por los servicios que prestan.

En cuanto al reclamo por la posibilidad de establecer tasas por estudios de grado que abre la Ley, la Cámara estableció en su fallo que "la Constitución no reconoce derechos absolutos e irrestrictos" y que "la gratuidad generalizada en el ámbito universitario es en realidad un subsidio a los pudientes".

Coincidente con lo que la misma Cámara expresara en otra causa motivada por la impugnación de los estatutos efectuada por el Ministerio de Cultura y Educación, se ratifica que "la recepción constitucional de la gratuidad no lo fue en forma lisa y llana, ya que en el art. 75. inc.19 CN se habla de los principios de gratuidad y equidad, conceptos que deben ser analizados conjunta y armónicamente, conectados íntimamente con los principios de igualdad y solidaridad".

El pronunciamiento reconoce así categóricamente que el "carácter de gratuidad no es absoluto, por lo que funcionará en la medida en que ella sea equitativa, y esto se logra -a criterio de la Cámara- estableciendo contraprestaciones en forma directa o indirecta conforme la situación particular del titular del derecho a aprender".

El tribunal, fundando esta posición, invoca un dictamen producido por el Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, en el que se afirma que: "La gratuidad generalizada en el ámbito universitario, es en realidad un subsidio para los pudientes. El arancelamiento -se dice- no es un asunto exclusivamente económico, sino también una cuestión fundamentalmente moral. El que puede pagar no solamente debe hacerlo porque tiene dinero, sino movido por un genuino sentido de solidaridad, porque reconoce que puede colaborar y contribuir para que la sociedad alcance mayores niveles de equidad".

Evaluación en la Universidad Nacional de Cuyo

En el mes de diciembre la Ministra de Educación, Susana Decibe, y el Secretario de Políticas Universitarias, Eduardo Sánchez Martínez, recibieron de manos del rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Lic. José Martín, los resultados de la evaluación institucional que realizó dicha universidad.

El 30 de julio de 1993 la Universidad Nacional de Cuyo firmó con el Ministerio de Educación de la Nación un convenio para realizar la evaluación institucional en esa casa de altos estudios. En mayo de 1994 comenzó la autoevaluación de las once facultades de la universidad. En el proceso se encuestó a 1740 docentes, estudiantes y graduados.

Idiomas

El departamento de Idiomas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires ofrece servicios para la realización de: Traducciones técnicas (folletos, guías para el usuario, manuales, especificaciones); traducciones científicas (ponencias para congresos, investigaciones, ensayos, artículos); traducciones comerciales (cartas, informes, artículos, formularios); traducciones públicas (documentos legales, pasaportes, certificados, títulos, diplomas, contratos, poderes); correcciones, supervisión, asesoramiento terminológico, interpretaciones (consecutiva y simultánea en disertaciones, reuniones, seminarios y conferencias).

En 1995 trece evaluadores externos visitaron y entrevistaron a la comunidad educativa.

Los resultados de la evaluación, fueron entregados a la Ministra Decibe y a Sánchez Martínez, y serán empleados por la universidad para elaborar una propuesta de gobierno para los próximos años, que entre otros aspectos contempla la creación de un programa de aumento de cargos con dedicación exclusiva, un sistema de comunicación interno y otro de asesorías para la elaboración de proyectos.

El rector de la UNC, Lic. Martín, dijo que «en 50 años de vida de la universidad es la primera vez que se expresa una autocrítica de esta naturaleza, y por eso es un hito histórico».

Posteriormente la Ministra Decibe y el Secretario

Sánchez Martínez inauguraron el laboratorio de informática, que forma parte del Proyecto «Mejoramiento de la Docencia Universitaria en el Área de Matemática».

Este proyecto está radicado en la Facultad de Ciencias Económicas, lo dirige Virginia Vera de Serio, es financiado por el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMECA) e involucra un total de 377 mil pesos. El equipamiento del laboratorio consta de 15 computadoras Pentium 100 Mhz, 30 computadoras 486 DX4 100 Mhz y software matemático.

La Universidad Nacional de Cuyo tiene en ejecución diez proyectos, por un monto total de 5,4 millones de pesos, a los que en 1997 se le sumarán 7 nuevos proyectos con una inversión de 2,8 millones de pesos más.

Mercosur Educativo

La Ministra Susana Decibe, viajó a la ciudad de Gramado, Brasil, donde participó de una reunión de Ministros de Educación del Mercosur y firmó un acta en la que se fijan importantes acuerdos educativos.

Decibe y sus pares de Uruguay, Brasil y Paraguay acordaron iniciar estudios de viabilidad para la acreditación de cursos dentro de un sistema de reconocimiento de títulos de grado así como continuar los estudios necesarios para la celebración de un Protocolo de Reconocimiento de Títulos de Graduados para el Ejercicio Profesional en el ámbito de los cuatro países, uno de los temas más críticos para convenir entre los Estados del Mercosur.

Se impulsará, asimismo, entre otros proyectos, la elaboración de un glosario de términos técnicos comunes a la región relacionados con la educación especial, así como uno destinado a ser utilizado en un Sistema de Información de Educación del Mercosur, y se estudiará la posibilidad de constituir una red de información en educación, ciencia y tecnología del Mercosur, además de encargar al Comité Coordinador la profundización de los estudios de Historia y Geografía de la región, entre otros temas.

Unificación curricular de la enseñanza de las ingenierías en la Argentina

Con el objetivo de mejorar la oferta educativa en el nivel de grado, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) viene llevando a cabo un Proyecto de modernización de la enseñanza de las ingenierías.

A principios de esta década, el CONFEDI, a través de su Comisión de Enseñanza, efectuó una recopilación de información para determinar la situación de la enseñanza de las ingenierías en la Argentina y llevó a cabo junto con el Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI) los dos primeros talleres sobre modernización de la enseñanza de las Ingenierías en la Argentina, a partir de lo cual se aprobó el proyecto de **"Unificación curricular de la enseñanza de las ingenierías en la Argentina"**.

El Proyecto parte de reconocer la situación académica actual, en la que se perfila un cuadro heterogéneo al que contribuyen la cantidad de títulos -con la consecuente problemática derivada en lo relativo a alcances y/o atri-

buciones profesionales- y planes de estudio que denotan diferencias aun cuando pretenden formar un profesional con capacidades comparables.

En el marco del proyecto, el CONFEDI y el ICI presentaron un informe que contiene recomendaciones dirigidas a unidades académicas adheridas al CONFEDI en lo referente a tiempo de duración de las distintas carreras, carga horaria, grados de homogeneización curricular y contenidos mínimos de las asignaturas.

Las acciones derivadas del Proyecto pretenden alcanzar y proyectar las bases conducentes a un cierto grado de homogeneización curricular en los respectivos planes de estudio de las distintas especialidades a efectos de asegurar un óptimo y homogéneo nivel de formación en todas las unidades académicas que adhieran al CONFEDI.

Se aspira a establecer para cada especialidad el número de créditos globales que conformarían el currículum

y los contenidos reconocidos como troncales, y posibilitar la determinación de la incidencia porcentual de las ciencias básicas, de las ciencias tecnológicas, así como de las áreas complementarias. Todo ello admitiendo los aspectos regionales y el grado de autonomía que debe ostentar cada unidad académica.

Además, como objetivo de máxima, se pretende contribuir al reconocimiento y reválida de títulos entre la República Argentina y España.

Esta iniciativa es muy importante en un sistema como el nuestro, en el que las universidades tienen la atribución de otorgar títulos habilitantes. Este es un aspecto que fue debatido al momento de sancionar la Ley de Educación Superior, puntualizándose en el texto legal la necesidad de establecer algunos requisitos para las carreras que pueden llegar a comprometer el interés público.

[agenda]

[Becas UNESCO-ASCHBERG para artistas 97/98]

La Dirección Nacional de Cooperación Internacional informa que se encuentra abierta la Convocatoria de Becas UNESCO-Aschberg para Artistas 97/98.

Esta convocatoria comprende las siguientes áreas: Artes Visuales, Música, Danza, Creación Literaria, Artes del Espectáculo, Investigación Textil y Diseño, Artes en la Comunicación (artes plásticas, fotografía, arte telemático, electrónico, multimedia, infografía, sonido y video, etc.).

Este programa tiene por finalidad promover el desarrollo profesional de jóvenes artistas (menores de 35 años) de todas las disciplinas, especialmente dando la oportunidad de entrenamiento o trabajo en el exterior.

La inscripción se realizará hasta el 15 de abril de 1997.

Los informes y formularios se entregan en: Programa de Becas, Dirección Nacional de Cooperación Internacional, Pizzurno 935-2do piso. Of.225 bis. 1020 Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 13 horas.

[Becas de perfeccionamiento para docentes en actividad]

Becas de Perfeccionamiento Para Docentes en Actividad, ofrecidas por el Ministerio de Educación (MOMBUSHO) del Gobierno de Japón.

Los interesados deben presentarse en: Centro Cultural e Informativo de la Embajada de Japón, Paraguay 1126 - CP 1057. El horario de atención es de 10 a 12 y de 14 a 17, de lunes a viernes. Teléfonos: 814-3111/4508.

**[Premio 1997
Academia Nacional
de Educación]**

Tema: "La educación técnica en la cultura del hombre contemporáneo".

Primer premio: consiste en la suma de \$5.000, diploma de honor y publicación del trabajo premiado. Segundo premio: consiste en la suma de \$2.000 y diploma. Menciones especiales: hasta cuatro. Se entregará diploma.

El límite para la presentación de trabajos es el 30 de junio de 1997. Informes e inscripción: en la sede de la Academia Nacional de Educación: Pacheco de Melo 2084, Capital Federal. TE: 860-2818

**[Premio Domingo
Faustino Sarmiento
1997]**

Tema: "Las nuevas formas culturales y la cultura de la escuela".

Primer premio: consiste en la suma de \$5.000, diploma de honor y publicación del trabajo premiado. Segundo premio: consiste en la suma de \$2.000 y diploma. Menciones especiales: hasta cuatro. Se entregará diploma.

El límite para la presentación de trabajos es el 30 de junio de 1997. Informes e inscripción: en la sede de la Academia Nacional de Educación: Pacheco de Melo 2084, Capital Federal. TE: 860-2818

**[Becas de
posgrado para jóvenes
profesionales en el exterior
1997/1998]**

La Secretaría de Programación y Evaluación Educativa del MCyE informa que se encuentra abierta hasta el 30 de abril la convocatoria para Becas de Posgrado para jóvenes profesionales en el exterior. En virtud de las necesidades de formación que plantea la Transformación Educativa se abre el concurso público para aspirantes de hasta 35 años inclusive, provenientes de todas las disciplinas que tengan interés en desarrollarse profesionalmente en el área de la educación: Administración y Gestión; Políticas; Formación Continua y Capacitación Docente; Currículum; Información y Evaluación; Economía y Financiamiento; Tecnologías y otras áreas afines a la educación.

Informes e inscripción:

- Cabecera de Red Electrónica Federal del Ministerio de Educación de cada Jurisdicción.
- Página Web: <http://www.mcy.e.gob.ar/profor>
- Correo internet: postmaster.mnffse.mcy.e.gob.ar
- FAX: (01) 815-8972 (para solicitar información, enviar dirección postal del interesado)

**Ministerio de Cultura y
Educación de la Nación**

Secretaría de Programación y Evaluación Educativa

LLAMADO A CONCURSO NACIONAL

El llamado está dirigido a: Facultades, Departamentos, Institutos universitarios y/o Programas de Posgrado pertenecientes a Universidades de gestión pública o privada con sede en la República Argentina que desarrollen carreras de grado o posgrado en el área de conocimiento o en disciplinas afines a las concursadas.

Los institutos o centros de investigación del Conicet u otros organismos similares de dependencia nacional y provincial, de gestión estatal y privada que desarrollen actividades en áreas de conocimiento afines a las disciplinas concursadas, podrán participar del llamado en las condiciones establecidas en las bases del concurso. Los Institutos de Formación Docente podrán participar en los concursos para el dictado de lengua extranjera (inglés).

Los interesados pueden retirar las bases del concurso de lunes a viernes de 9:30 a 17:30 hs. en la sede del Programa: Pizzurno 935, 1° piso, oficina 134. Capital Federal. Te: (01) 811-6836.

También estarán disponibles en las sedes de las Cabeceras Provinciales de la Red Federal de Formación Docente.

Provincia	Disciplina
Mendoza	Biología (1), Pedagogía (1) Lengua (1)
Río Negro	Pedagogía (1)
Salta	Biología (2) Matemática (1) Pedagogía (3) Psicología (1) Soc. Sist. De e Inst. Esc. (3) Geografía (2) Lengua (1) Historia (1)
Santiago del Estero	Biología (2) Psicología (2) Filosofía (1) Geografía (1) Historia (1)
Santa Fe	Física (2) Química (1) Pedagogía (4) Psicología (4) Soc. Sist. De e Inst. Esc. (3)
San Juan	Pedagogía (1) Soc. Sist. De e Inst. Esc. (1)
San Luis	Soc. Sist. De e Inst. Esc. (2)
Tucuman	Matemática (1) Pedagogía (6) Lengua (1)
San Luis y Mendoza	Geografía (1) Historia (1)
San Juan, San Luis y Mendoza	Lengua (1)
Chaco y Misiones	Física (1)
Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.	Física (1) Química (1)
Río Negro, Neuquén y La Pampa	Biología (1) Geografía (1) Historia (1)
Santa Cruz y Tierra del Fuego	Soc. Sist. De e Inst. Esc. (1)
Río Negro y La Pampa	Soc. Sist. De e Inst. Esc. (1)
Córdoba	Física (2) Química (2) Matemática (2) Psicología (1) Soc. Sist. De e Inst. Esc. (1) Lengua (2) Literatura (2) Geografía (2) Historia (2)